

## **Hidroituango: riesgo y responsabilidad**

Francisco Cortés Rodas

Director del Instituto de Filosofía

En la tensión que hemos vivido en Antioquia por la inminencia de un gran desastre en la represa de Hidroituango debo destacar el difícil, arriesgado y heroico trabajo de los técnicos e ingenieros de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), la medida de su gerente, Jorge Luis Londoño, la pronta asistencia de los organismos de prevención de desastres regionales y nacionales en el proceso de evacuación, el sufrimiento de los evacuados de las zonas de peligro y su disciplina y entereza frente al reto de tener que abandonar sus hogares. Desconcertante fue la patanería y arrogancia del Gobernador Luis Pérez, —informando, desinformando y ocultando—, y la bravuconería del Alcalde Federico Gutiérrez, —que como no ve sino sicarios y matones—, no ha dimensionado aún la gravedad del riesgo-. Ha sido lenta la organización y asistencia alimentaria a las más de 2.500 personas refugiadas en los albergues. Sin embargo, EPM informó que ofrecerá a quienes no quieran permanecer en estos, que se les dará a algunas familias un subsidio de 1.100.000 pesos, para que estas puedan pagarse un arriendo en otro lugar.

En medio de todo esto, porque así es Colombia, nos hemos enterado de que nuestro país está *ad portas* de hacer parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ingresar a este “club” supone que Colombia ha superado un test riguroso de cumplimiento de buenas prácticas en una serie de temas (medio ambiente, inversión extranjera, contratación estatal, educación, agricultura). Es probable que en esta evaluación la OCDE haya pasado por alto las consecuencias humanas, sociales y medioambientales que han

producido los recientes problemas de dos grandes proyectos de ingeniería del país —el puente de Chirajara y la represa de Hidroitungo—.

Sobre esta última megaobra realmente no pueden saber nada los burócratas de esta organización, pero vale la pena, aunque no haya tragedia, preguntarse cómo el proyecto Hidroitungo superó el famoso test de buenas prácticas en medio ambiente, si lo hicieron. Y no solamente el de la OCDE sino el de otros organismos de control. ¿Los hicieron?

Por información proveniente de la Fiscalía General de la Nación nos enteramos que no se ha revisado la contratación estatal. Al parecer la firma brasileña Camargo Correa, miembro del consorcio constructor, estaría involucrada en un posible pago de soborno para quedarse con el contrato.

Tampoco se han valorado las demandas y protestas sociales que la población indígena y campesina de la región han hecho en los últimos años a los gobiernos departamentales para que controle y regule los efectos negativos sobre la naturaleza que produce la construcción de la represa y para que, ante la decisión política de hacerla, se les den a los despojados tierras, proyectos productivos y viviendas que les permitan reemprender sus formas de vida.

Los últimos gobernadores, Fajardo y Pérez,<sup>1</sup> no prestaron atención a los efectos de la violencia directa asociada con este megaproyecto. Ha habido amenazas, torturas, ataques con explosivos y dos asesinatos de miembros del Movimiento Ríos Vivos. ¿Qué han hecho para proteger a las posibles víctimas? ¿Han ordenado investigaciones para dar con los responsables? De Puerto Valdivia hasta Cauca dicen que nada. En suma, parece que es posible entrar al club de las buenas prácticas sin practicar bien ciertas prácticas.

Hechas estas quejas y reclamos me interesa plantear lo siguiente: ¿es necesario o

---

<sup>1</sup> El proyecto hidroeléctrico Itungo es de propiedad del departamento de Antioquia a través de su brazo IDEA, que tiene el 50,7 % de las acciones, y EPM, con 46,3 %.

<sup>2</sup> “EPM obtuvo en 2017 unos beneficios financieros de \$2,1 billones, con un crecimiento de 19,1 % frente a las

no construir represas en nuestras sociedades? (Lo mismo se puede preguntar sobre fábricas, sistemas de transporte, construcción de carreteras, edificios, puertos) ¿Por qué, si se sabe que su construcción generará consecuencias negativas en el entorno natural y social, los Estados y las empresas las han hecho aquí y en muchos países del mundo? ¿Pueden construirse este tipo de megaobras de una forma que no destruya el entorno ambiental, social y humano? ¿Por qué el argumento de los ecologistas radicales que condenan toda intervención humana en la naturaleza es problemático? (Dicen: debemos vivir sin represas, metros, buses, volquetas, carreteras, internet, industrias).

Para responder estas cuestiones debemos preguntarnos, como lo han hecho la sociología clásica, ¿en qué sociedad vivimos? Cuando se producen catástrofes por contaminación atmosférica, por explosiones químicas o nucleares, derrumbes de montañas por deforestación, grandes inundaciones que arrasan ciudades y pueblos, nos damos cuenta con toda claridad que vivimos en el tipo de sociedad que el sociólogo alemán Ulrich Beck denominó “la sociedad del riesgo”.

“Los riesgos presumen decisiones y consideraciones de utilidad industrial, es decir, tecnoeconómica. Difieren de los dramas humanos, -las plagas, enfermedades y desastres naturales-, en que se centran en las ventajas y oportunidades tecnoeconómicas y aceptan los peligros como el simple lado oscuro del progreso” (Beck, 2002, p. 78). Esto tiene una consecuencia fundamental. Mientras los dramas humanos eran atribuibles a la naturaleza o a los dioses, los riesgos industriales “al originarse en el proceso de toma de decisiones se plantea de forma irrevocable el problema de la exigencia de responsabilidades sociales” (Beck, 2002, p. 79). Según la teoría sociológica de Beck, quienes toman estas importantes decisiones son responsables de los riesgos industriales.

En este contexto la actuación del Gobernador Luis Pérez fue irresponsable e infame. Se comportó como el típico especialista en la última posibilidad que

quedaba: negar los peligros y sugirió que si los había él los desconocía, pues se los habían ocultado. Esta es la peor forma de reacción de los políticos y líderes empresariales frente a un peligro. “Las medidas paliativas, que garantizan la seguridad incluso frente a los peligros, se sustituyen por el dogma de la infalibilidad tecnológica, que quedará refutado por el próximo accidente” (Beck, 2002, p. 84).

En el capitalismo se produce una dinámica de crecimiento y expansión que no se detiene. Esto está determinado por un impulso básico, que Marx describió así en los *Grundrisse (Fundamentos)*: “El capital debe esforzarse por derribar cualquier barrera especial al intercambio, esto es, a la compraventa, y conquistar toda la tierra para su mercado”. Esta dinámica expansiva, determinada por la acumulación sin límites del capital, que se ha profundizado y extendido en todo el planeta con la globalización neoliberal alcanzará en las próximas décadas nuevos espacios geográficos aumentando la explotación de las reservas ecológicas y los recursos naturales.

En Colombia, se han talado bosques, se han construido carreteras, puentes, túneles, se ha desviado el curso de los ríos, se han cavado montañas para sacar carbón, petróleo, oro, se han contaminado ríos, lagos y océanos, se han construido 18 represas desde 1990, y con estas obras se han generado importantes ganancias para los dueños de las grandes empresas y sólo secundariamente se ha atendido las necesidades de la gente.<sup>2</sup> “La larga historia de la destrucción creativa del territorio ha producido lo que a veces se llama “segunda naturaleza”, esto es naturaleza remodelada por la acción humana” (Harvey, 2012, p. 156).

---

<sup>2</sup> “EPM obtuvo en 2017 unos beneficios financieros de \$2,1 billones, con un crecimiento de 19,1 % frente a las ganancias de un año atrás de \$1,83 billones, según las cifras reportadas a la Superintendencia de Sociedades” (El Espectador, 20.05.18).

Estos procesos de destrucción creativa de la naturaleza conllevan por supuesto problemas sociales y ambientales, los cuáles no se podrán resolver soñando, como hacen muchos, con pretender regresar a una idílica sociedad preindustrial sin las máquinas y la tecnología producida por el capitalismo. En Colombia, con una población de 50 millones este regreso en la historia es totalmente inviable. El 85% de la demanda de energía se cubre con energía hidroeléctrica. Y esta la producen las represas. ¿Podría ser de otra manera? ¿Con energía eólica? Es probable, pero nos falta.

Colombia tiene en términos geopolíticos una realidad geográfica e hídrica que le permitiría convertirse en una potencia energética y agrícola capaz de transferir energía a otros países y abastecerlos. Sin embargo, el modelo de crecimiento de la economía bajo un esquema centrado en las industrias extractivas y una política energética basada en el petróleo, debe ser revisado y reversado para lograr un balance entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico. Esto no es regreso a la idílica sociedad de los bisabuelos. Es realismo en medio de la sociedad capitalista en la que vivimos.

Nuestras ciudades, ya casi megaciudades, han sido diseñadas para los negocios y el beneficio, no para el disfrute. Mediante la propaganda y el fomento deliberado de determinadas identidades que promocionan el Estado y los capitalistas, se han ido construyendo las subjetividades orientadas al consumo. En Medellín se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas el uso de automóviles y motocicletas, el número de familias que viajan en avión en vacaciones ha crecido enormemente, cada vez hay más centros comerciales siempre llenos, aumenta también el número de cirujanos plásticos y así todo crece en los cuerpos de la vanidad femenina y masculina. Es la sociedad de consumo que invadió estos territorios y muchos no se han dado cuenta de ello. Consumo y energía van juntos. ¿Cómo usar el computador, la nevera, el televisor, el iPad, el celular, el

ascensor, las escaleras eléctricas, Facebook, Instagram, Whatsapp y Twitter —los mínimos requerimientos para la vida cotidiana en nuestras ciudades—, sin energía eléctrica? Considerando que no tenemos energía nuclear, ni eólica.

Espero que los peligros para la población que vive abajo de la represa se puedan evitar y que los riesgos generados por los problemas técnicos se corrijan. Pero hay que recordar que en muchos casos la garantía de la técnica y de la ciencia en la construcción de grandes máquinas ha sido refutada por la ferocidad de un accidente. “No es el número de muertos y heridos, sino más bien una característica social, su autogeneración industrial, lo que hace de los peligros de la megatecnología una cuestión política” (Beck, 2002, 79). En la sociedad del riesgo, —representada aquí en la represa de Hidroituango—, los peligros son los que pueden sufrir los más de cien mil pobladores de la región afectada por el posible desbordamiento de la represa y los técnicos e ingenieros que allí trabajan. Estos son los peligros que las empresas, las organizaciones estatales y los políticos han denominado durante toda la época industrial “el simple lado oscuro del progreso”. Sin embargo, si se produce un desastre no puede ser entendido como un desastre natural. Sería una calamidad resultado de decisiones y consideraciones de utilidad. Esto plantea que los riesgos, lo repito, en la medida en que se originan en los procesos de toma de decisiones técnicas, científicas y políticas determinan que haya responsabilidades administrativas, sociales y políticas. “Las empresas, las organizaciones estatales y los políticos son responsables de los riesgos industriales” (Beck, 2002, p. 79).

Para la discusión que debe darse está planteada, —independiente del candidato que obtenga la presidencia—, que el modelo de crecimiento de la economía centrado en las industrias extractivas y la política energética basada en el petróleo y la construcción de grandes represas, deben ser revisados para lograr un balance entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico.

